



Un tren de cercanías parado en la estación de Atocha, en Madrid. / ALVARO GARCIA

Sánchez anuncia un plan de choque para recuperar la economía en 2023

RAMÓN MUÑOZ. Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó ayer el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones para esbozar un plan que, según las previsiones del Ejecutivo, impulsará la recuperación económica que se

iniciará ya este año, se acelerará durante 2021 y 2022, y se completará en 2023, superando los niveles de antes de la pandemia de la covid-19. Entre las medidas anunciadas, algunas de las cuales ya habían sido comunicadas, se encuentran, entre otras, un impul-

so a la inversión en Cercanías, la reorientación del Plan de Vivienda hacia "alquileres asequibles", la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo, un nuevo plan de internacionalización de la economía y la revisión de la fiscalidad de la alimentación.

El jefe del Ejecutivo admitió que todavía quedan meses "muy difíciles" en el terreno económico, pero se mostró convencido de que la recuperación comenzará este año y el crecimiento del PIB se incrementará en 2021 para despegar con mayor velocidad en 2022 gracias a los fondos de reconstrucción que provendrán de la Unión Europea.

Para 2023, el presidente auguró que el PIB puede rebasar incluso el de 2019 pero con un crecimiento "mejor, más competitivo y más productivo", y un "salto en digitalización, sostenibilidad, cohesión social y territorial y competitividad", que "no dejará a nadie por el camino".

Sánchez detalló que la agenda de Gobierno que se implementará en los próximos meses pasa por una "atención preferencial" a las medidas contempladas del acuerdo de coalición con Unidas Podemos y buscan la creación de empleo de calidad, para lo que se renovarán las políticas activas de empleo y se consolidarán los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como alternativa al despido. Sobre la polémica derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, el jefe del Ejecutivo se limitó a señalar que se realizará dentro del diálogo social como garantía "necesaria e imprescindible" de la estabilidad que precisa España.

El presidente se refirió al préstamo de 20.000 millones que España ha solicitado formalmente a la Comisión Europea de

los fondos del SURE para costear los ERTE y restó importancia a las críticas que se señalan como fondos de rescate.

"Hay gente que cree que con esto se puede entrar en si a España se la ha rescatado o no. Pero es un juego que a mi me importa más bien poco. Vamos a acogernos al fondo de reaseguro de desempleo porque queremos proteger a los trabajadores de los ERTE. La oposición dirá que es un rescate. Efectivamente, es un rescate a los trabajadores que necesitan del apoyo de lo público", recalcó.

Respecto a la inversión pública, el plan de infraestructuras se centrará en mejorar la red de Cercanías y cerrar corredores ferroviarios en construcción como

el del Mediterráneo o el Atlántico, aunque no citó expresamente los propósitos sobre la extensión de la red del AVE, cuyo gasto fue recientemente criticado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

En la misma línea, ratificó la ya anunciada reestructuración del actual Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para derivarlo a la construcción de pisos que se pongan en alquiler a precios "asequibles". También prometió un impulso a la rehabilitación de viviendas. El Ministerio de Transporte ya anunció un plan de rehabilitación a dos años que supondrá movilizar una inversión, pública y privada, de unos 2.000 millones de euros y que aspira a multiplicar por cuatro

el número de pisos que se reforman al año en España, de forma que ascienda a unos 120.000 anuales, con la generación de 221.000 empleos.

El presidente también adelantó que se acometerán acciones concretas que contribuyan al crecimiento, con una actividad ya avanzada en el programa del Gobierno, como la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo para evitar la fuga de las industrias de alto consumo eléctrico. Además se abordará el tercer plan para la internacionalización de la economía 2021-2022 y una carta de derechos digitales ante las grandes corporaciones.

En el ámbito del empleo público, avanzó que se aprobará el proyecto de Ley de Función Pública en la Administración General del Estado (AGE) y que se desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público, al tiempo que se elaborará un pacto de Estado para la modernización de la administración de la Justicia.

Igualmente, apuntó que se aprobará un plan estatal de I+D+i, la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación 2021-2027 y medidas en el ámbito de la igualdad. A su vez, se impulsarán acciones en defensa de los consumidores, como la aprobación de un real decreto sobre el juego y una revisión de la fiscalidad sobre los alimentos, así como la introducción de la figura del consumidor vulnerable.

No habrá petición al Mede para costear el gasto sanitario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que España no tiene la necesidad de recurrir a la ayuda canalizada a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) para costear el gasto sanitario, después de que el país solicitase a la Comisión Europea acceder a más de 20.000 millones del SURE, el fondo europeo para financiar ERTE y prestaciones de autónomos.

"Nosotros en principio con los volúmenes de recursos que estamos volcando creo que no hay necesidad de recurrir al Mede", señaló Sánchez. Este mecanismo dispone de una línea de crédito ya activada a muy bajo interés de hasta 240.000 millones de euros, de los que España podría solicitar hasta 24.000 millones, equivalente al 2% de su producto interior bruto.

Los empleados de Nissan apuran el plazo para el acuerdo

JOSEP CATÀ. Barcelona

El plazo para que los trabajadores de Nissan en Barcelona aceptaran la propuesta de la empresa terminó en una jornada maratónica de negociaciones que en la noche de ayer continuaban. Pese a estar en posiciones casi irreconciliables, la mediación del departamento de Trabajo de la Generalitat convenció a los representantes de los trabajadores y a la empresa para que mantuvieran una reunión y prorrogaran el período de consultas hasta la medianoche. Este movimiento habilita la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por Nissan que afecta a 2.525 personas en las fábricas barcelonesas, y sobre las posibilidades de reindustrializar las plantas.

Hasta el último momento, la negociación en Nissan ha estado marcada por el enfrentamiento entre los representantes de los trabajadores y la dirección. Desde que en mayo la automovilística anunciase el cierre de las fábricas de Barcelona, las posturas de las dos partes han ido evolucionando hasta el encamionamiento. Frank Torres, designado por la multinacional para pilotar el cierre, lanzó el viernes un ultimátum: o los trabajadores aceptaban la propuesta de la empresa o Nissan tiraría adelante con el ERE sin acuerdo, contemplando la posibilidad de que se pagase el mínimo establecido por ley en los despidos.

Posturas enconadas

El plazo para que los trabajadores aceptaran esta propuesta terminaba ayer. Este plan, a condición de que los trabajadores abandonasen la huelga que mantienen desde hace tres meses, preveía mantener la actividad industrial hasta el 31 de diciembre de 2021 aunque garantizaba la continuidad de todos los empleos solo hasta finales de 2020. Además, la propuesta de la empresa fijaba unas indemnizaciones por despido lejos de las demandas de los trabajadores.

Los sindicatos dejaron claro que rechazaban la propuesta de Nissan. No obstante, y con el período de consultas ya concluido, los mediadores de la Generalitat mantuvieron una reunión telemática con los sindicatos en la que aceptaron estar abiertos al diálogo si Nissan se abría a considerar otros acuerdos. La reunión solo con los representantes sindicales duró toda la mañana, y por la tarde se aceptó la participación de Nissan. Ambas partes acordaron prorrogar el período de consultas hasta la medianoche "para explorar un posible acuerdo entre las partes".